

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501820130003502
Proceso:	Ordinario
Demandante:	LUZ ELENA MUÑOZ LONDOÑO
Demandado:	COLFONDOS S.A
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	09/02/2023
Decisión:	CONFIRMA, ADICIONA Y REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 13/02/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	LUZ ELENA MUÑOZ LONDOÑO
INTERVINIENTE AD EXCLUDENDUM	JOSE LEONEL RÍOS SILVA
DEMANDADA	COLFONDOS S.A.
LLAMADA EN GARANTÍA	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
ORIGEN	Juzgado Dieciocho Laboral Circuito de Medellín
RADICADO	05 001 31 05 018 2013 00035 02
TEMAS	Pensión de sobrevivientes
CONOCIMIENTO	Apelación y consulta
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUZ ELENA MUÑOZ LONDOÑO contra COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., al que fue integrado como interviniente Ad Excludendum JOSE LEONEL RÍOS SILVA y como llamada en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

El señor Luz Elena Muñoz Londoño formula demanda contra Colfondos S.A, pretendiendo **i)** el reconocimiento y pago de **pensión de sobrevivientes** con ocasión del **fallecimiento de Saray Elena Castro Muñoz, su hija**, desde el 31 de mayo de 2011, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, **ii)** Intereses de mora del

¹ 01PrimerInstancia; 01Expediente18201300035.pdf, págs. 3/6

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, **iii)** indexación de las condenas; y **iv)** costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus pretensiones en que procreó con Jaime de Jesús Castro Roldán a su hija Saray Elena Castro Muñoz, quien falleció el 31 de mayo de 2011, estando afiliada a Colfondos S.A. y teniendo reunidas 114.71 semanas de cotización durante los tres (03) años anteriores al deceso. La señora Luz Elena Muñoz Londoño no trabaja, no es pensionada, no recibe rentas que le permitan independencia económica, y su hija Saray velaba por su manutención y sostenimiento hasta el día de su fallecimiento, pese a que contrajo matrimonio civil con el señor José Leonel Ríos Silva el 28 de noviembre de 2010, unión en la que no concibieron hijos. El 8 de junio de 2012 solicitó ante Colfondos S.A. el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hija, la cual fue negada bajo el argumento que el señor José Leonel Ríos Silva en calidad de cónyuge también la había solicitado, y le fue negada por no acreditar el tiempo mínimo de convivencia con la causante.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Colfondos S. A². refiere que con ocasión al fallecimiento de la causante, se presentaron a reclamar el señor José Leonel Ríos Silva en calidad de cónyuge supérstite y la señora Luz Elena Muñoz Londoño, en calidad de madre de la causante, quienes de conformidad con lo arrojado por la investigación administrativa adelantada por Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. no acreditaron los requisitos para ser acreedores de la prestación; el primero por no demostrar el periodo de convivencia de 5 años exigido jurisprudencialmente para ser acreedor de la prestación, pues la pareja convivió un total de 4 años, 3 meses y 7 días; y la segunda por haber constatado que lo aportado en vida por la causante constituía una mera colaboración, y que la ausencia de su ayuda no afectó su nivel de vida de la madre, de manera que no se configuró su dependencia económica. De otro lado, solicitó que, de reconocer la prestación, se tenga en cuenta la forma de financiación de la prestación, la cual se basa en la responsabilidad compartida entre la AFP y la aseguradora. Excepcionó: lo que se interpreta como la no dependencia de la demandante respecto de la afiliada fallecida para subsistir, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, pago y compensación, prescripción y la que llamó “genérica”.

Llamó en garantía a Mapfre Colombia Seguros de Vida S.A., con quien contrató póliza colectiva de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes³, el cual fue admitido mediante auto del 19 de diciembre de 2014⁴.

² 01PrimerInstancia; 01Expediente18201300035.pdf. págs. 111/139

³ 01PrimerInstancia; 01Expediente18201300035.pdf págs. 161/176

⁴ 01PrimerInstancia; 01Expediente18201300035.pdf pág. 324

Demanda Interviniente ad excludendum

José Leonel Ríos Silva -Interviniente Ad Excludendum-⁵ Se opuso a las pretensiones de la demandante argumentando que si bien contrajo matrimonio civil con la causante en noviembre de 2010, su convivencia inició desde enero del año 2007, no procrearon hijos, y los gastos del hogar eran asumidos en su totalidad por la pareja, y aun cuando la causante le colaboraba a su madre, señora Luz Elena Muñoz Londoño con \$60.000 pesos mensuales, ello no era suficiente para que ésta dependiera económicamente de la causante, por cuanto recibe ingresos del arrendamiento del tercer piso donde vive y por la actividad de confección de peluches; advierte que la demandante no paga arrendamiento en el inmueble que habita por ser propiedad del señor Jaime de Jesús Castro (padre de la fallecida). Acepta que solicitó la prestación ante Colfondos S.A., la cual fue negada el 2 de enero de 2012 por no haber acreditado convivencia de 5 años.

Por lo anterior, **pretendió** se declare **i)** le asiste derecho a la **devolución de saldos** de la cuenta de ahorro individual de la demandante por ser el primer beneficiario, y en consecuencia de ello **ii)** se ordene la devolución de saldos en su favor, incluidos **rendimientos** y el valor de **bono pensional** si a ello hubiere lugar, y **ii)** costas procesales.

La demanda de intervención fue admitida contra Colfondos S.A. y la señora Luz Elena Muñoz Londoño⁶

Oposición a la demanda de intervención

Luz Elena Muñoz Londoño⁷ se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones, por no acreditar el requisito de convivencia exigido para ser beneficiario de la prestación de sobrevivientes. Excepcionó: falta de causa para pedir e inexistencia de la obligación.

Colfondos S.A. ⁸ se opuso al reconocimiento de la **devolución de saldos**, afirmando que acorde a lo manifestado en comunicación del 2 de enero de 2013, dicha prestación quedó **supeditada** a que se allegara copia auténtica de la sentencia judicial o de escritura pública, mediante la cual se realizó **juicio de sucesión** de la afiliada fallecida en la que se determinen los **herederos** acreedores de los saldos de la cuenta de ahorro individual con sus rendimientos, documento que no ha recibido. Excepcionó: inexistencia de la obligación, no se acreditó el requisito de convivencia para ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia, cobro de lo no debido, buena fe, pago y compensación, prescripción, y la que llamó "genérica".

⁵ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf. págs. 79/82 Escrito subsanado

⁶ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf. págs. 165/166

⁷ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf. págs. 212/215

⁸ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf. págs. 216/232

Llamamiento en garantía.

Mapfre Colombia Seguros de Vida S.A.⁹ se opuso a las pretensiones de la demanda del señor José Leonel Ríos Silva, por no acreditar el tiempo mínimo de convivencia exigido por ley para acceder a la prestación, así como a la pretensión de devolución de saldos hasta tanto no aporte la sentencia judicial o escritura pública en la que se determine la calidad de heredero acreedor de los saldos de la cuenta de ahorro individual. Excepcionó: falta de legitimación en la causa del interviniente para solicitar la devolución de saldos y la que denominó “genérica”.

Asimismo, se opuso al llamamiento y excepcionó: ausencia de cobertura de la póliza por no cumplimiento de requisitos, improcedencia de intereses moratorios, improcedencia de pretensión de condena en costas.

Finalmente¹⁰, se opuso a las pretensiones de demanda de la señora Luz Elena Muñoz negando que ésta hubiera dependido económicamente de la causante. Excepcionó: inexistencia del derecho, inexistencia de mora y la que llamó “Genérica”. Y reiteró los argumentos y excepciones formuladas con la oposición al llamamiento de José Leonel Ríos Silva.

Sentencia de primera instancia¹¹

El 3 de julio de 2015, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia condenando a Colfondos S.A. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la señora Luz Elena Muñoz Londoño por el fallecimiento de su hija Saray Elena Castro Muñoz, a partir del 1° de junio <sic> de 2011, ordenando por concepto de retroactivo pensional entre el 1° de junio de 2011 hasta junio de 2015 el valor de \$30'653.900, y a continuar pagando a partir del 1° de julio de 2015 una mesada equivalente a 1SMLMV, con los incrementos de ley y la mesada adicional. Declaró no probadas las excepciones formuladas por la AFP y por Mapfre llamada en garantía, **ordenó a esta última a cubrir la suma adicional requerida para completar el capital necesario para financiar el monto de la pensión de sobrevivientes** reconocida por Colfondos en favor de la demandante. Condenó al pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 9 de agosto de 2012 hasta que se haga efectivo su pago. Absolvió de las demás pretensiones elevadas por José Leonel Ríos Silva en contra de Colfondos S.A. Finalmente condenó en costas a Colfondos S.A. en la suma de \$3'200.000 en favor de la demandante.

Para decidir, la Juez A Quo en primer lugar desestimó la pretensión del interviniente ad excludendum por no acreditar 5 años de convivencia con su cónyuge Saray Elena Castro Muñoz, la causante, pues en el interrogatorio de parte éste indicó que convivieron desde el 19 de febrero de 2007 y el fallecimiento de la causante fue del 31 de mayo de 2011. Concluyó en la dependencia económica de la demandante respecto de la causante, si

⁹ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf págs. 345/351

¹⁰ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf págs. 353/361

¹¹ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 412/414

bien no fue total, si resultaba suficiente y significativa para aquella, por haberle proporcionado la afiliación a salud, pagaba los servicios de un predio no desenglobado, constituyó un seguro para garantizar una situación de desprotección a su madre, pagó una póliza para en el evento de faltar tuviera recursos para ayudarse, lo cual concuerda con la declaración de los testigos. Advirtió que, si bien los hermanos de la causante ayudaban económicamente a la demandante con una suma de \$170.000 cada uno de ellos, según lo indicó ella en la investigación administrativa, dichos montos deben analizarse a la luz de las aclaraciones realizadas por la demandante al ratificarlo en el estrado judicial, en cuanto la aseguradora al indagar por dichos montos solicitó una cifra, indicando la actora que esa ayuda no era permanente, lo cual fue corroborado por el testigo Jaime de Jesús Castro Roldán, quien señaló la poca responsabilidad de los dos hijos varones, resaltando la de la causante. Circunstancias de donde se extrae que la causante era la principal aportante de los gastos de la demandante. De otro lado, los recursos propios devengados por la demandante por su labor de costurera no son significativos, y resultan inferiores al aportado por la fallecida.

Respecto del llamamiento en garantía indicó que la póliza colectiva de seguro previsional y de sobreviviente 912408900114 se encontraba vigente para el momento del fallecimiento de la afiliada, según consta en renovación del contrato, concluyendo cumplidas las exigencias legales para que la prestación se sufrague a costa de los saldos de la cuenta de ahorro individual de la causante y además de la suma adicional a la que se obligó Mapfre a través de la póliza.

Recursos de apelación

i) Demandante: recurrió la decisión, en cuanto al número de mesadas ordenadas pagar, afirmando le asiste derecho al pago de 14 mesadas, y no 13, pues la afiliada falleció el 31 de mayo de 2011 y devengaba un salario mínimo, por lo que acorde al Acto Legislativo 01 de 2005, al haber causado su derecho antes del 31 de julio de 2011, debe respetársele la mesada adicional.

ii) Colfondos S.A.: solicita se revoque la sentencia de instancia argumentando que pasó por alto el A Quo hechos demostrados en las declaraciones otorgadas por José Leonel, Luz Elena y los testigos, por lo siguiente:

- a) Refiere que el salario de Saray era de \$523.000 durante los 5 meses anteriores a su muerte, con cual cubría sus gastos personales, los que tenía como cónyuge y los de su propio hogar, por lo que se cuestiona como hacía para sostener a su madre con dicho valor. Se demostró que la demandante tenía ingresos propios por la confección de peluches, que sus hijos Mario y Diego aportaban \$170.000 ambos, la vivienda se la otorgaba el padre de la fallecida, los gastos de la demandante no eran muchos según la manifestación de su ex cónyuge, equivalían a \$150.000 a \$200.000, por lo que la demandante si tenía ingresos propios que le permitían subsistir y Saray carecía de medios para demostrar que podía aportar con tal incidencia que su madre dependiera económicamente de ella. Además de no contar con ingresos suficientes debía demostrar que la subsistencia de la demandante dependía de la fallecida, lo cual no se hizo pues con posterioridad al

fallecimiento de Saray sigue percibiendo los mismos aportes de sus hijos y de su esposo, y aun cuando ya no viven en el apartamento que él le suministraba aporta con la vivienda o una parte de la cuota del arrendamiento.

- b) Existe contradicción en los dichos de los testigos y la demandante, en torno a los servicios y la alimentación, al decir que los mismos se repartían en 3 partes con los 3 hijos, incluso el padre dijo que cuando los hijos no aportaban él era quien suplía ese aporte, al preguntársele cuántas veces suplió dijo que solo 1 vez cuando los había sacado de la casa, concluyéndose que ellos siempre cumplieron con su obligación de pagar los servicios.
- c) No hay prueba, ni testigo directo que viera a Saray comprar o pagar el mercado a su madre, por el contrario, el testimonio de Gloria Estella no merece credibilidad por desconocer si la demandante es pensionada, a qué EPS está afiliada, si los hijos y el señor Jaime le ayudan, dónde trabaja Saray, cuánto gana, cuánto eran los gastos de la demandante, pero sabe exactamente que Saray pagaba los servicios, mercaba y que el señor Jaime Castro había construido el 4º piso donde vivía Saray con José, es un testimonio amañado, solo manifestó conocer respecto al aporte de mercado y servicios.
- d) Que la demandante fuera beneficiaria en salud no puede tenerse como prueba reina para determinar dependencia económica, máxime cuando dicha afiliación se dio de forma circunstancial puesto que José Leonel dijo no ser beneficiario porque él trabajaba; que su hijo Mario no la podía afiliar porque él tenía unos hijos, el ex esposo no la afiliaría como beneficiaria al tener otro grupo familiar, por lo cual quien la podía tener como beneficiaría era Saray.

Por lo expuesto, solicita se desestime la testimonial porque no fueron contundentes, no conocieron directamente los hechos, Jaime Castro demostró interés fehaciente por ganarse la demanda, pues manifestó que el mismo contrató los abogados y que estaban pendientes que la demandante se ganara la pensión de sobrevivencia.

Acorde con lo anterior, solicita se nieguen los intereses de mora; pero de confirmarse la orden de reconocer la pensión, solicita se confirme la condena emitida contra la aseguradora de pagar la suma adicional y los intereses, pues, aunque Colfondos S.A. es quien debe reconocer la pensión, esta fue quien realizó la investigación administrativa y concluyó que no había dependencia, no reconoció la suma adicional por lo cual la AFP no tendría como financiar la pensión de sobrevivencia.

iii) Mapfre Seguros - Llamada en garantía

Deprecia se revoque lo decidido, atribuyendo a la argumentación del Aquo las siguientes deficiencias: falta de análisis de la prueba testimonial, por basarse en el interrogatorio de la parte demandante, cuando solo puede estimarse como confesión de aquellos hechos contrarios a quien está absolviéndolo, no pudiendo tenerse como una prueba válida para sustentar los hechos que fundamentan una pretensión y una demanda, ni respecto del ingreso de \$50.000 que ella obtenía por la confección de peluches ella, por estar en

contradicción con lo expresado por el interviniente quien indicó que él y la fallecida le colaboran a ella llevando los peluches, era una actividad permanente y le generaban ingresos que podían oscilar entre \$100.000 y \$150.000. Otra falencia es el haber negado el juez que hubiera claridad en las preguntas formuladas en la investigación de dependencia económica de la madre respecto de la hija, y atribuirles ambigüedad respecto a cuál momento se referían las ayudas económicas que reconoció la demandante haber recibido de sus hijos varones y que según esa vinculada resultaban ser superiores al aporte de la causante¹², esto implicaba concluir que sí están probados los ingresos que percibía de sus hijos para el momento de la muerte de la afiliada.

Olvidó el A Quo que donde residía la demandante también habitaba una persona que paga un arrendamiento, el interviniente fue claro al indicar que le consta porque Saray le contó y le tocó ver que esta persona vivía y pagaba entre \$120.000 y \$150.000, demostrándose que la actora tenía unos ingresos, en tanto la afiliada fallecida percibía un escaso ingreso porque hacía 6 meses que no laboraba de forma completa y ganaba \$530.000 para atender sus gastos y los propios del hogar.

Resalta que el juez de instancia al analizar la prueba recaudada en el proceso solo se refirió al cuestionario que la demandante ratificó, y lo apreciado respecto a los ingresos recibidos de los hijos no corresponde a lo escrito en los documentos, pese a que las preguntas fueron claras y contundentes. Los ingresos anteriores al fallecimiento de la afiliada en el fl. 310 fue categórica al indicar que eran los que recibía de Saray, Mario y Diego, y en el fl. 305 enfatizó en la conservación de los ingresos percibidos antes del fallecimiento de Saray, coligiendo que Saray proveía una ayuda no necesaria como concluyó el A Quo, si desaparecen esos \$60.000, hasta el dinero que pagaba de los servicios públicos, las condiciones de vida de la demandante no varían, ella con los ingresos que percibía por los peluches, el arrendamiento y por los ingresos de los hijos podía seguir atendiendo sus gastos, como actualmente lo hace, aunque su ex compañero sostenga que no son muy significativos.

Conforme a lo expuesto solicita se analice la prueba en conjunto, de la testimonial, de los interrogatorios, pero solo en cuanto a la confesión porque nada hay de lo que la demandante haya afirmado puede ser tenido como prueba y valorado en el presente

¹² Niega que las preguntas sobre el tiempo fueran ambiguas, pues según fl. 305 se advierte que se le pregunta en pasado a la demandante sobre los ingresos que percibía, la pregunta ¿quién más aportaba? no tienen ninguna duda que le están preguntando al momento del fallecimiento par atrás cómo era el aporte y cuando la demandante indica monto con el que colaboraba Mario Andrés: \$170.000 no cabe duda que estaba contestando que antes de la muerte de la afiliada ese hijo le daba esos ingresos, lo mismo en Diego Esteban dice que colaboraba con \$170.0000.

Refiere al folio 308, contentivo del cuestionario realizado a la demandante, donde se le hacen preguntas relativas después del fallecimiento de la afiliada, para mostrar que el cuestionario es muy claro. Así, la parte más contundente de que el ingreso que recibía la demandante de sus hijos era antes de que su hija falleciera es la pregunta de folio 310, si ella dijo que al fallecer su hija le aportaban 3 personas, estando probado en ese documento que cada uno de los 2 hijos ganaban \$750.000 y Saray \$525.000, por lo que se duele que el A Quo concluya que esta era quien más aportaba, ya que los dos hijos daban \$340.000 que incluso superaban los gastos de la demandante según dijo su ex compañero quien afirmó que no llegan a \$160.000, \$170.000, la demandante con los ingresos que tenía podía atender sus propios gastos.

asunto como útil para argumentar su demanda, pues no se demostró la dependencia económica, en los términos expuestos por las Altas Cortes.

Correctivo procesal

En conocimiento de lo apelado por la demandante, Colfondos S.A. y la llamada en garantía, esta Corporación emitió una sentencia de segunda instancia el 24 de enero de 2019¹³ desatando la alzada. Luego al conocer el recurso extraordinario de casación, la H. Corte Suprema de Justicia Sala Laboral de Descongestión, en auto del 22 de septiembre de 2021¹⁴ declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso desde el auto del 19 de abril de 2019 que admitió el recurso de casación, y devolvió las diligencias a este Tribunal para que de ser necesario ex officio se adoptaran los correctivos procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso¹⁵.

En cumplimiento de lo dispuesto y como correctivo procesal, se dispuso a dejar sin efectos la sentencia proferida por esta Sala de Decisión Laboral del 24 de enero de 2019 y se adicionó el auto del 21 de noviembre de 2016 en el sentido de avocar conocimiento del proceso en grado jurisdiccional de consulta en favor de José Leonel Ríos Silva como interviniente ad excludendum¹⁶.

Alegatos en segunda instancia

Otorgado el término para alegar en esta sede, solo Colfondos S.A. y la llamada en garantía lo recorrieron, la primera reiterando que debe revocarse lo decidido desde la primera instancia, porque no se demostró la dependencia económica de la demandante respecto de la causante, en tanto la responsabilidad económica del hogar de Luz Elena era compartida entre la causante y el señor Germán Castro, y lo aportado por aquella era para sufragar sus propios gastos en el hogar por residir en el mismo lugar; además el nivel de vida de la actora no se afectó con el fallecimiento de su hija, toda vez que de la investigación administrativa se desprende que el señor Germán cubría un 100% todos los gastos. Resalta que la H. Corte Suprema de Justicia ha indicado que la simple participación en los gastos del hogar no constituye, ni hace dependiente económicamente a un padre de un hijo. De otro lado insiste en que los intereses moratorios solo aplican cuando hay mora en las mesadas pensionales, y en este caso se debate el reconocimiento del derecho, y de declararse sería en virtud de una orden judicial, puesto que Mapfre S.A. fue quien negó el reconocimiento por incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

Finalmente, se opone a la condena en costas reiterando que la actora no demostró la dependencia económica respecto de su hija.

¹³ 02SegundaInstancia; 01SentenciaSegundaInstancia1820130035.mp3

¹⁴ 02SegundaInstancia; 02ExpedienteCorte1820130035.pdf págs 93/103

¹⁵ 02SegundaInstancia; 09AutoCumplaseDecretaNulidadAvocaFijaFecha1820130035.pdf

¹⁶ 02SegundaInstancia; 01SentenciaSegundaInstancia1820130035.mp3

Por su parte **Mapfre Seguros de Vida S.A.**, iteró que el Juez A Quo no valoró en debida forma el material probatorio recaudado, pues concluyó que la demandante dependía económicamente de la causante, solo por tenerla afiliada al sistema de salud, dado que era la única persona del grupo familiar que podía afiliarla, y ello, por sí, no implica dependencia económica; y se duele porque en su sentir hubo claridad en las preguntas formuladas por el investigador de la aseguradora, mientras que la juez no lo consideró así, y aun cuando la actora trató de cuestionar la investigación en el interrogatorio de parte, ese no era el momento procesal oportuno para controvertir el material probatorio. Señala que hay confesión respecto de los gastos de manutención que eran asumidos por sus hijos, además llama la atención de que esta afirma que la causante le aportara la suma de \$280.000, lo cual no considera creible por representar más de la mitad del salario que devengaba la afiliada cuando tenía un hogar conformado con el señor Leonardo, y se encontraba en estado de embarazo; se indicó que los hijos aportaban \$340.000 y el señor Jaime de Jesús Castro afirmó que los gastos de la causante no excedían de \$200.000, de manera que con lo aportado por los hijos sufragaba sus gastos, deviniendo innecesaria la ayuda económica recibida de la causante, máxime por cuanto la actora tenía sus ingresos propios por la fabricación de unos peluches, que conforme a lo indicado por el señor Leonardo ascendían a \$100.000.

Pide que en caso de confirmarse el derecho a la prestación, no se le condene en mora, por emanar de la sentencia ese derecho, y en caso contrario, tener en cuenta que, acorde con la jurisprudencia, el fondo es el obligado a reconocer la prestación, y no la aseguradora.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, es decir, en consonancia con los puntos que fueron objeto de apelación, y adicionalmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de José Leonel Ríos Silva, a quien no le prosperó su demanda de intervención.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada en su contra, y la demanda de intervención formulada, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver en primer lugar se circunscribe a determinar: **a)** la procedencia del reconocimiento bien sea, de la prestación de sobrevivientes, o la devolución de saldos en favor de José Leonel Ríos Silva como cónyuge supérstite de la señora Saray Elena Castro Muñoz; en caso de no salir adelante la prestación deprecada por éste, se procederá a analizar **b)** sobre la procedencia del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de Luz Elena Muñoz Londoño con ocasión del fallecimiento de su hija Saray Elena Castro Muñoz; en caso afirmativo, se definirá **c)** si a la actora le asiste derecho al reconocimiento y pago de la mesada 14; y **d)** la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

No se discute que la afiliada dejó causado el derecho a la prestación de sobrevivientes o que hubiera sido hija de la demandante, por cuanto, Colfondos S.A. al negar la pensión, arguye que lo hace porque existir un beneficiario con mejor derecho y porque la señora

Luz Elena no dependía económicamente de la causante para la fecha del fallecimiento¹⁷, más **no aduce que la prestación no se haya causado**.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

- Saray Elena Castro Muñoz nació el 3 de diciembre de 1982¹⁸. Fue hija de la hoy demandante y de Jaime de Jesús Castro Roldán¹⁹, y contrajo matrimonio civil el 28 de noviembre de 2010 con el señor José Leonel Ríos Silva²⁰
- Saray Elena Castro Muñoz cotizó ante Colfondos S.A. 319 semanas entre junio de 2003 y mayo de 2011²¹, contando con más de 57 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento.
- Saray Elena Castro Muñoz falleció el 31 de mayo de 2011²².
- La demandante, Luz Elena Muñoz Londoño solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes ante Colfondos S.A. el 8 de junio de 2012²³, el cual fue rechazado por la AFP mediante comunicado del 11 de octubre del mismo año²⁴ aduciendo que ésta no puede ser tenida en cuenta como beneficiaria de la pensión, por existir un beneficiario con mejor derecho, en virtud de la reclamación elevada por el señor José Leonel Río Silva en calidad de cónyuge.
- Nuevamente el 23 de agosto de 2011 la demandante radica solicitud de pensión de sobrevivencia en calidad de madre de la afiliada fallecida, Saray Elena Castro Muñoz²⁵.
- Certificación del 5 de marzo de 2012 sobre afiliación al POS de EPS SURA, de Luz Elena Muñoz Londoño en calidad de beneficiaria de la causante Saray Elena Castro Muñoz²⁶.
- Cuestionario diligenciado por José Leonel Ríos Silva el 22 de octubre de 2012²⁷.
- Cuestionario para madre dependiente reclamante de pensión de sobrevivencia, diligenciado el 22 de octubre de 2012²⁸.
- Comunicado del 2 de enero de 2012 emitido por Colfondos S.A., por medio del cual objeta la solicitud de pensión de sobrevivientes y en consecuencia la devolución del

¹⁷ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf págs. 26/28; 153/156 y 157/159

¹⁸ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 13

¹⁹ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf págs. 20/21

²⁰ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 22.

²¹ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 13

²² 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 14

²³ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 24/25

²⁴ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 26/28 y 153/156

²⁵ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 150/152

²⁶ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 29/30

²⁷ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 84/88

²⁸ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 367/378

dinero de la cuenta de ahorro individual, que formuló el señor José Leonel Ríos Silva en calidad de cónyuge, negando que éste hubiera acreditado 5 años de convivencia²⁹.

- Comunicado del 6 de marzo de 2011 por medio del cual Mapfre reitera la negación de prestación de sobrevivientes al señor José León Ríos Silva por no acreditar 5 años de convivencia con su cónyuge³⁰.

- Comunicado del 14 de enero de 2013 por medio de la cual Mapfre Colombia deniega la solicitud de reconsideración del rechazo de solicitud de indemnización por el amparo de “sumas adicionales para la pensión de sobreviviente” por no acreditar la demandante dependencia económica respecto de la causante³¹.

- La demandante señora Luz Elena Muñoz Londoño, falleció el 8 de junio de 2021³²,

a) Pensión de sobrevivientes y devolución de saldos en favor del cónyuge sobreviviente.

Es necesario advertir, que aun cuando el interviniente ad excludendum no deprecó el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia³³, la juez A Quo en la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS³⁴, fijó el litigio en torno a establecer si le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia bien sea a la señora Luz Elena Muñoz Londoño, bien al señor José Leonel Ríos Silva, derecho que fue objeto de pronunciamiento por la juez de instancia, por lo cual esta Sala de Decisión analizará en primer lugar la procedencia de esta prestación en favor del cónyuge, y solo de concluir que no acredita los requisitos para ello, se proseguirá con el estudio de la devolución de saldos.

Por encontrarse afiliada la señora Saray Elena Castro Muñoz al momento de su fallecimiento en el Régimen de Ahorro Individual, las prestaciones que se generan están reguladas a partir del Título III de la Ley 100 de 1993.

La calidad de beneficiaria invocada por la demandante está regulada en el artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003, modificadora de los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993, esta última que es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 74. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida

²⁹ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf págs. 89/90

³⁰ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf págs. 92/94

³¹ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf págs. 157/159

³² 02SegundaInstancia; 04ComunicadoDefuncionDemandante.pdf pág. 8

³³ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf. pág. 80

³⁴ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf pág. 393

marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.”

En este punto es importante resaltar que esta Sala de Decisión, en atención a lo que sostuvo la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1730 de 2020, en la cual precisó que la exigencia de mínimo cinco (5) años de convivencia, era para aquellas (o) compañeras (o) o cónyuges supérstites de un pensionado y no para quienes alegaran la referida condición respecto de un afiliado fallecido, había modificado su postura en torno a la exigencia el periodo de convivencia, a que estuviera garantizado aquel que permitiera hablar de la unión marital de hecho (2 años).

Pese a lo anterior, en **atención a que fue dejada sin efectos la referida providencia por la H. Corte Constitucional en reciente sentencia SU 149 de 2021** ordenando a la Sala de Casación proferir nueva sentencia *“en la cual observe el precedente adoptado por la Corte Constitucional, en el sentido de que, en los términos del artículo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para el cónyuge como para el compañero o la compañera permanente, es de cinco (5) años, independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado”*; **se ve esta Sala precisada a retomar la postura anterior, en ese sentido.**

Así, José Leonel Ríos Silva, tenía la carga de acreditar que convivió con Saray Elena Castro Muñoz al menos durante los últimos cinco (5) años de vida de la misma.

Colfondos S.A. negó la prestación en sede administrativa, al concluir que el cónyuge no acreditó los 5 años de la convivencia³⁵.

El demandante en su escrito de intervención, manifestó que contrajo matrimonio con la causante el 28 de noviembre de 2010³⁶, pero que en momento anterior, iniciaron unión marital de hecho desde enero del año 2007, conviviendo hasta el momento del fallecimiento de la causante, que lo fue en el 31 de mayo de 2011. En su interrogatorio de parte adujo similar tiempo de convivencia, al indicar que *“Yo conviví con Saray Desde febrero de 2007 hasta la fecha de su muerte, no siempre en Medellín, empezamos el 19 de febrero de 2007 en el Municipio de Guarne en una finca, aproximadamente ahí vivimos 2 meses, después encontramos un apartamento en todo el pueblo donde vivimos aproximadamente 2 meses, de ahí me resultó un trabajo en Pilsen, trabajé allí y ya construimos una casa en el 20 de julio en las propiedades de mi suegro Jaime de Jesús y convivimos ahí hasta que falleció, en la casa del 20 de Julio empezamos a vivir aproximadamente en octubre de 2007 más o menos, antes de eso en Itagüí viví 15 días mientras nos construían la casa, después ya vivimos totalmente ahí”*.

³⁵ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf págs. 89/90

³⁶ 01PrimerInstancia; 01Expediente1820130035.pdf. pág. 79

Estando aceptado por el mismo cónyuge el tiempo de convivencia con la causante, la cual perduró alrededor de 4 años y 3 meses, la Sala arriba a la misma conclusión de la A Quo de negar la prestación al cónyuge, al no haber acreditado el requisito de convivencia de los 5 años anteriores al fallecimiento de la causante, por lo que se **confirmará** la sentencia de instancia en este aspecto.

A continuación, procede esta judicatura a adentrarse en el estudio de la devolución de saldos por muerte de la causante, situación que está regulada por el artículo 78 de la Ley 100 de 1993, que al tenor reza:

***“Devolución de saldos.** Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se entregará a sus beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos, y el valor del bono pensional si a este hubiera lugar.”*

A su vez el artículo 76 de la precitada Ley que dispone que:

En caso de que, a la muerte del afiliado o pensionado, no hubiere beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, las sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional, harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante.

En caso de que no haya causahabientes hasta el quinto orden hereditario, la suma acumulada en la cuenta individual de ahorro pensional se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente Ley.

De la normativa enunciada, se establece que al fallecer un afiliado que no deja causada la pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios, el reconocimiento de la prestación denominada “devolución de saldos” le corresponde a quien acredite la calidad de beneficiario, que para el presente asunto sería en los términos señalados en el numeral C del artículo 47 de la Ley 100 de 1993³⁷, computado con el valor del bono pensional, si a este hubiere lugar. Y en el evento que no hubiera beneficiarios, el saldo correspondería a los herederos del afiliado.

De conformidad con el presupuesto citado, **no prosperará la pretensión de devolución de saldos elevada por el interviniente ad excludendum**, en tanto quedó acreditada que **la afiliada fallecida si dejó causada la pensión de sobrevivientes**, al alcanzar la densidad mínima de semanas que exige la norma para acceder a la prestación.

Adicional a lo anterior, ha de indicarse que **la devolución de saldos solo procede a falta de beneficiarios de la prestación de sobrevivientes**, y en el presente asunto al

³⁷ c) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.”

deprecarse por parte de la señora Luz Elena Muñoz Londoño en calidad de madre dependiente de la causante, - de quien se concluirá le asiste derecho como se expone en acápite siguiente-, y no haber acreditado el cónyuge su derecho para acceder a la prestación de sobrevivencia, conforme prevé el literal d) del artículo 74 de la Ley 100 de 1994, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003³⁸ se despachará desfavorablemente la pretensión del interviniente en cuyo favor se revisa la sentencia en grado jurisdiccional de consulta.

Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Descongestión Laboral, en **sentencia SL 2448 de 2020**, al analizar un asunto similar al hoy estudiado, en que ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la demandante, que ostentaba condición de madre de la afiliada fallecida, por no existir una persona con *mejor derecho*, que otrora lo fue en ese caso, la hija de la causante, quien era mayor de 25 años de edad y según la AFP demandada con derecho a la devolución de saldos, concluyó que esta última prestación solo procederá a falta de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

De los preceptos transcritos, se advierte que, solo en el caso de aquellos afiliados al régimen de ahorro individual que fallezcan sin que se acredite el cumplimiento de las exigencias para causar una pensión de sobrevivientes, sus causahabientes tendrán derecho a la devolución de los saldos de la cuenta de ahorro individual, para lo cual debe necesariamente computarse el valor del bono pensional, si a éste hubo lugar.

Cuando la ley establece el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o en su defecto la devolución de dichos saldos a los «beneficiarios», deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 74 de la misma Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para así acreditar tal condición.

*En consecuencia, **únicamente en el evento de que no hubiese personas con derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes**, debe acudir a lo señalado en el **artículo 76 de la Ley 100 de 1993**, que reza: «Inexistencia de Beneficiarios. En caso de que, a la muerte del afiliado o pensionado, no hubiere beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, las sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional, **harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante**».* (Subrayas intencionales).

*De lo anterior, se concluye que el Tribunal **no** equivocó el alcance de la referida normativa, ni le hizo producir efectos distintos a los allí contemplados, pues, **se itera, es clara en determinar que, como primera medida, debe analizarse si se cumplen los requisitos para causar la pensión de sobreviviente y, solo, a falta de beneficiarios, procederá la devolución de saldos.***

*Como quedó visto y concluyó el Tribunal, **en este asunto sí existía beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, esto es, la madre del causante que dependía económicamente de su hija fallecida, lo que excluye la posibilidad de la devolución de saldos que haga parte de la masa sucesoral, máxime que se***

³⁸ “Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: (...) d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> **A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente** e hijos **con derecho**, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente ~~de forma total y absoluta~~ de este; (...)”

mantiene incólume por no haberse derruido, la inferencia de la alzada de que la hija de la afiliada era mayor de 25 años y no dependía de su progenitora al momento de la muerte de ésta.

Por lo expuesto, se **confirmará** la absolución impartida desde la primera instancia a lo pretendido por José Leonel Ríos Silva, pero por las razones aquí expuestas, y al no salir adelante el primer planteamiento del problema jurídico, se procederá con el análisis de la pretensión de la señora Luz Elena Muñoz Londoño.

b) La demandante como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes

La calidad de beneficiaria invocada por el demandante está regulada en el artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003, modificadora de los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993³⁹, y exige la dependencia económica de los padres respecto del causante, para el momento del deceso.

En criterio de la H. Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, la prestación de sobrevivientes constituye “*una garantía frente al estado de desprotección económica de un grupo de personas que no pueden subsistir con recursos propios y cuyas condiciones de existencia se encuentran ligadas a lo que proveía su descendiente fallecido*”⁴⁰

Esa Corporación y la H. Corte Constitucional, han definido el alcance de la dependencia económica como el estado de necesidad que se predica de quien depende económicamente, frente a la persona que asume la obligación de su sustento, precisando que tal situación **no tiene que ser total y absoluta**⁴¹, porque en el contexto de un Estado Social de Derecho **no puede exigirse la configuración de estados de indigencia**, pero, sí debe existir una relación de necesidad entre el aporte y la vida digna del beneficiario, de modo que en el contexto jurisdiccional, el análisis debe enfocarse en que sin la ayuda del benefactor, la persona frente a quien se predica la dependencia económica entraría en un estado de afectación considerable de sus derechos fundamentales, por consiguiente, al faltar la ayuda del afiliado, la economía del petitionario se vería menoscabada.

Según lo anterior, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su línea jurisprudencial, precisó las siguientes sub reglas aplicables, en el estudio de estos asuntos⁴²:

³⁹ D) A falta de cónyuge, *compañero o compañera permanente* e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este;

⁴⁰ SI4599 de 2019

⁴¹ En Sentencia C-111 de 2006, decidió “Declarar **EXEQUIBLES** los literales d) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, salvo la siguiente expresión: “*de forma total y absoluta*”, que se declara **INEXEQUIBLE**”

⁴² La línea jurisprudencial se abandera por la sentencia hito, radicación N° 35.156 del 9 de junio de 2010 de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ratificada en las sentencias radicación N° 35.991 de 2011; N° 37.595 de 2011; N° 42.792 de 2011; SL 9640 de 2014; SL 8928 de 2014; SL 8406 de 2015 radicación N° 47.693 del 1 de julio de 2015, entre otras.

- La dependencia económica debe definirse en cada caso particular y concreto, según el análisis conjunto de la prueba legalmente decretada y practicada.
- Para concluir la dependencia, **es menester que se demuestre subordinación económica relevante, esencial y preponderante del beneficiario frente al causante para el momento del fallecimiento**, de modo que, al faltar el ingreso, se afecte el mínimo sostenimiento de la familia.

Ha expresado esa Alta Corporación que debe entenderse por dependencia económica *“«la subordinación de una persona respecto de otra, por necesitar de su ayuda o auxilio para llevar una vida digna», puntualizando que dicha condición desaparece «cuando la persona es autosuficiente, por estar en capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos indispensables para su subsistencia en condiciones de dignidad»”*⁴³.

El concepto atiende a *“i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo”*⁴⁴. “la dependencia de los padres respecto de sus hijos no debe ser absoluta, pero en todo caso la relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, debe ser de tal proporción que les impida valerse por sí mismos, aun cuando cuenten con recursos propios o provenientes de terceros”⁴⁵.

Dicha postura, reiterada en sentencias como las SL 1016 de 2020, SL 10759 de 2020 y SL 2375 de 2020, entre otras, también enfatiza en que la dependencia económica no se desvirtúa porque los reclamantes tengan ingresos provenientes de terceros ajenos al causante del que se predica la dependencia o tengan vivienda propia.

Al tenor del art.167 del CGP, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen; por tanto, en el asunto objeto de estudio, compete al demandante demostrar que dependía económicamente de su hijo Marco Andrés Madrigal Gómez para el 26 de junio de 2010, cuando falleció⁴⁶.

Con la intención de formar el convencimiento judicial en este sentido, la demandante solicitó que se recibieran los testimonios de Jaime de Jesús Castro Roldán, Gloria Stella Restrepo de Higueta, Gloria María Gómez Castro y José Leonardo Osorio Ramírez⁴⁷. De ellos comparecieron los dos primeros. Por su parte Colfondos S.A. y Mapfre Colombia Seguros de Vida S.A. solicitaron que se recibiera el interrogatorio de parte de la demandante y del interviniente ad excludendum⁴⁸. Las personas citadas como testigos comparecieron, al igual que la demandante y el interviniente lo hicieron para absolver el interrogatorio de parte.

⁴³ Sentencia SL1219 de 2019, citando la 44601 de 2011

⁴⁴ SI 848 de 2019, citando la SI 14923 de 2014

⁴⁵ SI.4599 de 2019

⁴⁶ FI.25.

⁴⁷ 01PrimerInstancia; 01Expediente01820130035.pdf pág. 6

⁴⁸ 01PrimerInstancia; 01Expediente01820130035.pdf pág. 139

De las declaraciones se extrae la siguiente información relevante:

<p>Luz Elena Muñoz Londoño -Demandante-</p>	<p>Fue bachiller, ama de casa. Refirió que al momento del fallecimiento de su hija vivía sola y trabajaba en confección de peluches por lo cual recibía \$50.000, niega que devengara para ese momento \$120.000 por arrendamiento del tercer piso de su casa, toda vez que no era su propiedad si no del padre de su hija. El dinero que percibía por confección lo destinaba a gastos personales como de aseo personal, pues su hija Saray cubría los gastos quien le daba en efectivo \$60.000 mensuales, y de los otros gastos no conocía los costos porque su hija se los llevaba, como alimentación, mercado, vestuario, la llevaba al médico, estaba afiliada a su EPS como beneficiaria. Refiere que no puede casi caminar por lo que Saray siempre le llevaba el mercado. Niega que sus hijos varones le ayudaran económicamente.</p> <p>Frente a la entrevista realizada por Mapfre a la demandante, aseguró en su interrogatorio que el formulario lo diligenció su sobrina porque ella tiene dificultades para escribir, negó que sus hijos Mario Andrés y Diego colaboraran permanentemente con los gastos de su hogar como allí aparece, aclarando que dio esas cifras porque el entrevistador así lo pedía.</p>
<p>Jaime de Jesús Castro Roldán -Testigo demandante-</p>	<p>Fue compañero permanente de la demandante desde 1975 hasta 1989, afirmó que tuvieron tres hijos: Diego Esteban, Mario Andrés y Saray Elena, ésta última comenzó a trabajar asumiendo toda la obligación y el control de la administración de los bienes de la familia, resalta que los varones eran desjuiciados económicamente, y Saray la más ordenada. Explica que él construyó un edificio de 4 pisos, pero al separarse de la señora Luz Elena nunca hicieron separación de bienes, y permitió que Saray viviera en esa propiedad, un tiempo vivió con sus hermanos en el segundo piso, y cuando comenzó una relación con José, Saray acondicionó el 4º piso y se pasó con Mario Andrés, el cual se componía de 2 locales, en el izquierdo vivía Mario Andrés con Mónica y Mariana y en el derecho vivía Sara Elena con José, donde vivieron hasta que falleció su hija, mientras que un año antes del fallecimiento y dado el incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de sus hijos varones, lo sacó de la casa, quedando la demandante sola en el 3º piso y Saray con su esposo en el 4º, y cuando se fueron sus hijos, ésta no volvió a recibir apoyo económico de sus hijos, incluso refiere problemas de drogadicción de Mario Andrés y que su estado de salud decayó tras el fallecimiento de su hija Saray.</p> <p>Reitera que en vida de Saray sostenía a Luz Elena, pagaba los servicios en compañía con José, que ascendían alrededor de \$180.000 los cuales llegan al 3º piso porque no se habían dividido, mercaba, le daba al rededor \$50.000 o \$60.000 para los gastos urgentes y personales, la tenía afiliada a la EPS, la tenía como beneficiaria de un seguro con el que se sostuvo un año luego del deceso. Aseveró que la demandante nunca trabajó en empresa,</p>

	<p>nunca recibió rentas que le permitan independencia económica, nunca ha recibido arrendamientos, siempre ha vivido en las propiedades del deponente, y aunque tenía una actividad de confección de peluches, ello no le dejaba ni \$40.000 mensuales,</p> <p>Es enfático al indicar que el gasto de la demandante dependía directamente de Saray y un mínimo financiamiento que el deponente le hacía a Saray, para hacer arreglos en el cuarto piso, le consta porque siempre vivió pendiente de la administración del edificio de su propiedad y por el trato con sus hijos, adicionalmente el pago del mercado fue un acuerdo verbal al que él llegó con su hija a cambio de darle la vivienda y de cuidar de su madre.</p>
<p>Gloria Estella Restrepo de Higuita -Testigo demandante-</p>	<p>Conoció a la demandante hace 45 años en razón de vecindad, por haber vivido a tres casas, la visitaba cuando eran vecinas o se veían desde el balcón. Afirmó que Saray, hija de la demandante, fue quien veló económicamente por ella desde que comenzó a laborar, momento para el cual la salud de la señora Luz Elena estaba deteriorándose, su hija pagaba servicios, mercaba, salía con su madre, la llevaba al médico lo cual conoce porque lo veía en razón de su vecindad. Indicó que dicha señora no es pensionada, no recibe ayuda del estado. No sabe si los demás hijos le colaboraban económicamente porque ellos cogieron su rumbo, ni cuál es la EPS de la demandante, ni el colegio donde trabaja Saray, sin embargo, ello por si solo no desvirtúa su declaración, como alega la apoderada de Colfondos, en tanto lo afirmado sobre la dependencia económica fue presenciado por la deponente, advirtiéndose de su dicho conocimiento del personal del hecho o la circunstancia, no es testigo de referencia.</p>

Es de anotar que para Colfondos S.A. y la llamada en garantía, las versiones de los testigos no resultan creíbles, doliéndose de la valoración del A Quo en torno a la testimonial, que para las apelantes no resulta acorde con la realidad, por lo que considera no puede deducirse, como lo hizo el juez de instancia, si tales versiones no son certeras que si existió una dependencia económica, y aun cuando puede indicarse si existió una colaboración de la hija para con su madre, negando que se haya acreditado la magnitud, frecuencia e importancia de ésta para su congrua subsistencia.

En el sub examine la declaración de parte recibida a la hoy demandante no puede desestimarse aun cuando proviene de la interesada en las results del proceso, porque examinada en conjunto con las versiones rendidas en éste por terceros se pueden obtener elementos para formar el libre convencimiento sobre la verdad de los hechos.

-Sobre este medio de prueba, la Corte Constitucional en **sentencia C-599 de 2009**, dijo: *“El interrogatorio o declaración de parte tiene por objeto obtener de los demandantes o demandados la versión sobre los hechos relacionados con el proceso, toda vez que suministra certeza al juez sobre la verdad de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda o de las excepciones, y con él se busca formar el convencimiento judicial respecto de la realización de determinados hechos que interesan*

al proceso, pues constituyen el sustento de las peticiones presentadas por las partes dentro del mismo. (...).

En torno a lo aducido por la actora en el interrogatorio de parte respecto de la investigación administrativa adelantada por Mapfre, **negó que sus hijos Mario Andrés y Diego colaboraran de forma permanente con los gastos de su hogar** como allí quedó consignado, aclarando que dio cifras sobre aportes realizados por ellos, porque el entrevistador así lo pedía, pues aunque ella le indicara que era esporádico él insistía en que diera una cifra, y así lo hizo; circunstancia que fue corroborada por el señor Jaime de Jesús Castro Roldán quien estaba presente al momento de la entrevista, y al rendir declaración ante el Juez de Instancia señaló que el entrevistador **“hizo todas esas preguntas, condujo el interrogatorio, manipuló todo, dijo que así no estaba bien, esto queda mejor de esta manera”**, no pudiéndosele dar valor probatorio a dichas respuestas para desvirtuar la dependencia económica, pues además, de tales se advierte en todo caso una dependencia parcial⁴⁹ al indicar la demandante que el aporte de su hija era mensual y consistía en alimentación, transporte y servicios, lo cual, valorado en conjunto con la prueba testimonial analizada denota subordinación económica relevante, esencial y preponderante de la aquí demandante respecto de su hija para el momento del fallecimiento, sin que se advierta independencia económica de la demandante por sus presuntos derechos herenciales, (cuya cuantía se ignora), por cuanto si bien podrían existir, no se probó que representaban ingresos para subsistencia de la demandante en vida de su hija Saray Elena.

Ahora, la modificación del contrato de Saray Elena de tiempo completo a medio tiempo, meses previos a su fallecimiento y las adecuaciones del 4º piso donde ella vivía con su esposo, no significa necesariamente la desaparición de la dependencia económica, en tanto fueron claros los deponentes Jaime De Jesús Castro Roldán Y Gloria Estella Restrepo De Higueta respecto a que Saray permanentemente suplió las necesidades económicas de su madre en cuanto a alimentación y servicios entre otros; tales versiones son conducentes y pertinentes para demostrar la dependencia económica de la demandante, respecto de su hija fallecida al demostrar conocimiento directo de sus dichos por ser integrantes del grupo familiar de la actora, el primero, y vecina cercana para la época de los hechos acá discutidos, la segunda. De éstas se logra establecer la destinación de una proporción considerable del salario de la causante a la satisfacción de las obligaciones del hogar de la demandante, para proveer alimentación y servicios entre otros.

Los dichos del testigo Jaime De Jesús Castro Roldan coinciden con lo expuesto por el interviniente José Leonel Ríos Silva cónyuge de la afiliada fallecida, al indicar que Saray le colaboraba a su madre, era una excelente hija y estaba pendiente de ella, la hoy demandante vivía con los otros dos hijos, había una disputa entre los hijos porque a Saray se le exigía mucho más por ser profesional, no siendo proporcional para los servicios y lo que le colaboraba, en mercado. Y en torno a la aseveración de que la demandante nunca trabajó en empresa, nunca recibió rentas que le permitan independencia económica, nunca ha recibido arrendamientos, siempre ha vivido en las

⁴⁹ 01PrimerInstancia; 01Expediente01820130035.pdf pág. 372

propiedades del deponente, coincide con lo expuesto por la demandante en su interrogatorio de parte y no logra desvirtuar el cónyuge sobreviviente señor José Leonel Ríos Silva en tanto su declaración al respecto es evidentemente parcializada por su interés en las resultas del proceso.

La testigo Gloria Estella Restrepo Gómez de Higuita coincidió con la demandante y el deponente Jaime De Jesús Castro Roldan en cuanto a que al momento del fallecimiento la señora Luz Elena vivía sola en el 3º piso.

Atendiendo al alcance hermenéutico del concepto de dependencia económica analizado anteriormente, es claro para la Sala que tal no debe ser total y absoluta, al resultar improcedente predicar estados de indigencia en el contexto de un Estado Social de Derecho. Basta con demostrar una afectación sustancial a las condiciones materiales de vida o la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que permita a los beneficiarios obtener unos ingresos para vivir de manera digna⁵⁰.

Y es precisamente este aspecto el que se probó suficientemente en el plenario, sobre todo con la prueba testimonial la cual merece credibilidad a esta Sala por apreciarse con claridad la relación de necesidad que se predica para concluir la dependencia económica de la demandante frente a la afiliada fallecida, de quien además fue su beneficiaria en salud y en el seguro de vida referido por los deponentes. Presentando afiliación para el año 2016 al régimen subsidiado⁵¹ lo que corrobora el estado de necesidad en el que se encontró debido a la ausencia de ayuda que en vida le prodigó su hija para una digna subsistencia.

En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión **confirmará** la decisión proferida por el Juez de primera instancia, pues se acreditaron en suficiencia los presupuestos normativos para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante.

b) Procedencia del reconocimiento de la mesada 14

Para resolver lo apelado por la activa respecto a la inclusión de la mesada 14, ha de indicarse que atendiendo al IBC y a la densidad de semanas cotizadas por la fallecida, la pensión de sobrevivientes equivale al salario mínimo mensual legal vigente para cada anualidad⁵², y conlleva el de los aumentos anuales o periódicos autorizados por la Gobierno Nacional, por lo cual asiste razón en su recurso, procediendo la modificación de la sentencia de instancia, disponiendo reconocer 2 mesadas adicionales según el inciso 8º y el parágrafo transitorio 6o. del Acto Legislativo 01 de 2005, por causarse el derecho con anterioridad al 31 de julio de 2011, al haber fallecido el 31 de mayo de 2011.

⁵⁰ Sentencias T-491 de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-732 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-111 de 2006. MP. Rodrigo Escobar Gil.

⁵¹ 01PrimerInstancia; 01Expediente018201300035.pdf pág. 427

⁵² Artículo 48 Ley 100 de 1993.

Extensión de la condena en concreto

Por mandato del artículo 283 del CGP, procede el Despacho a liquidar las condenas desde el 1° de junio de 2011 -día siguiente al fallecimiento de la causante- hasta el 8 de junio de 2021 -fecha de fallecimiento de la demandante-, tomando para el efecto 14 mesadas al año, en el equivalente a un SMLMV cada una de ellas, por lo que **Colfondos S.A. pagará en favor de la masa sucesoral de la señora Luz Elena Muñoz Londoño**, la suma de **\$98.237.652** detallados como se indica a continuación:

Valor pensión	Numero mesadas	Total Retroactivo
\$ 535.600	9	\$ 4.820.400
\$ 566.700	14	\$ 7.933.800
\$ 589.500	14	\$ 8.253.000
\$ 616.000	14	\$ 8.624.000
\$ 644.350	14	\$ 9.020.900
\$ 689.454	14	\$ 9.652.356
\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
\$ 908.526	5 y 8 días	\$ 4.784.904
TOTAL		\$ 98.237.652

Lo anterior, sin perjuicio de la orden impartida a Mapfre Seguros de Vida de cubrir la suma adicional que se requiera para completar el capital necesario para financiar el monto de la pensión de sobrevivientes.

Se **adicionará** la sentencia para autorizar a Colfondos S.A, que descuenta del retroactivo pensional, el valor de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Salud, con fundamento en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, y en lo decantado por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en esta materia⁵³.

e) Intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Se acogerá lo apelado por Colfondos S.A. debiendo revocar la condena emitida por intereses moratorios, debido a la concurrencia de reclamantes de la pensión, siendo derechos excluyentes entre sí. Además, por cuanto Colfondos S.A. obró de buena fe, ateniéndose al resultado de la investigación administrativa realizada por la aseguradora, no procede condena al pago de intereses de mora en su contra.

Sin embargo, atendiendo a que se formuló como pretensión subsidiaria, se ha de garantizar que la masa sucesoral de la señora Luz Elena Muñoz Londoño perciba lo adeudado en su real valor, por ende, se ordenará la indexación sobre el retroactivo de

⁵³ En las sentencias de SL 1195 del 29 de enero de 2014, radicación 48.918, SL 9782 del 23 de Julio de 2014, radicación 54.583; SL 10143 del 30 de Julio de 2014, radicación 45.232; SL 13547 del 1 de octubre de 2014 radicación 47.264, entre otras.

mesadas pensionales ordenados en esta sentencia; a partir de la fecha de causación de cada una de ellas, hasta el momento de su pago.

Para indexar, la demandada tomará la fórmula que ha sido avalada por la H. Corte Suprema de Justicia en la materia:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que haya de efectuarse el pago;

El ÍNDICE INICIAL corresponde al índice de la fecha de exigibilidad de cada mesada pensional, puesto que son prestaciones periódicas.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor de cada mesada a indexar.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por la demandada han quedado implícitamente resueltas, mereciendo especial pronunciamiento la de prescripción, que no operó, por no haber transcurrido entre la negación de la prestación y la radicación de la demanda, los tres años consagrados en los art 488 del CST y 151 del CPTSS.

IV. COSTAS

Sin costas en esta sede por haber prosperado parcialmente los recursos ambas partes.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 3 de julio de 2015, por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por Luz Elena Muñoz Londoño contra Colfondos S.A., al que fue integrado como interviniente ad excludendum el señor José Leonel Silva y **llamada en garantía Mapfre Seguros de Vida; modificándola** en el sentido que a la demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la mesada 14 y extender la condena en concreto por el cual **Colfondos S.A.** pagará por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 1° de junio de 2011 y el 8 de junio de 2021 en favor de la masa sucesoral de la señora Luz Elena Muñoz Londoño el valor de **\$ 98.237.652**. Cifra que se indexará a la fecha del pago, como se dejó expresado en la parte motiva de esta providencia. Sin perjuicio de la orden impartida a Mapfre Seguros de Vida de cubrir la

suma adicional que se requiera para completar el capital necesario para financiar el monto de la pensión de sobrevivientes.

SEGUNDO: Adicionar la sentencia conocida, para autorizar a Colfondos S.A. que descuenta del retroactivo pensional, el valor de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Salud, con fundamento en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993

TERCERO: Revocar el numeral cuarto de la sentencia en cuanto ordenó el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por lo ya motivado.

CUARTO: Sin costas en esta sede.

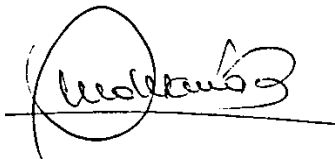
Notifíquese por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ
(Con salvamento de voto)



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

SALVAMENTO DE VOTO

De manera respetuosa presento los argumentos para apartarme de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, porque en este caso se acredita una convivencia superior a 4 años entre **SARAY ELENA CASTRO MUÑOZ y JOSÉ LEONEL RÍOS SILVA** a quién por encontrarse en el primer orden de los beneficiarios consagrado en el **artículo 13 de la Ley 797 de 2003**, se le ha debido reconocer la pensión de sobrevivientes causada por su **cónyuge**.

La mayoría de los integrantes de la Sala comparte la visión que expone la Corte Constitucional en la sentencia **SU 149 – 2021** con la que se dejó sin efectos la sentencia **SL1730 de 2020**.

A mi modo de ver, la interpretación efectuada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en esta providencia, reiterada en otras como la **CSJ SL3843-2020, CSJ SL3785-2020, CSJ SL4606-2020, CSJ SL489-2021, CSJ SL362-2021, CSJ SL1905-2021, CSJ SL2222-2021 y CSJ SL5270-2021**, se acompasa con la clara intención del legislador desde la expedición de la Ley 100 de 1993, al establecer una diferenciación entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte de **afiliados** al sistema no pensionados, y la de **pensionados**, esto es, la conocida como sustitución pensional, previendo como requisito tan solo en este último caso, un tiempo mínimo de convivencia, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, "*convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes*", por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión.

A mi juicio, la distinción efectuada por el legislador en el **artículo 47 de la Ley 100** y posteriormente en el **literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003** comporta una legítima finalidad, se trata de una diferenciación que en manera alguna surge discriminatoria a la luz de lo dispuesto en el **artículo 13** de la Constitución Política, porque la igualdad solo puede predicarse entre iguales, debiendo justamente establecerse para salvaguardar ese principio, la diferencia de trato entre desiguales.

En este caso, el elemento diferenciador lo constituye la **condición en la que se encuentra el causante de la prestación**, aspecto que fue analizado por la Corte

Constitucional en la sentencia **C1094 de 2003**¹ y en reiteradas sentencias de tutela referidas a casos de pensión de sobrevivientes en los que fallece un pensionado²; oportunidades en las que, acudiendo a los antecedentes de la Ley 797 de 2003 publicados en la Gaceta Judicial 350 de 2002 Página 16, expuso la legitimidad de la exigencia de 5 años continuos al momento de la muerte **del pensionado** que con un derecho consolidado, deja causada la prestación a los miembros de su núcleo familiar con el solo hecho de la muerte. En efecto, es en esta circunstancia que adquiere relevancia la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia para evitar fraudes al sistema pensional, proteger el núcleo familiar de reclamaciones artificiosas y contener conductas dirigidas a la obtención injustificada de beneficios económicos del Sistema, cuya sostenibilidad debe salvaguardarse de tales actuaciones, precisamente para que sea posible el cumplimiento de los fines para los cuales fue previsto.

Así, la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 referida a que se trata de una exigencia solo a los casos en que quién fallece es un pensionado, no solo proviene de la **claridad del texto** y de la **finalidad del legislador al momento de consagrarla**, sino de los planteamientos efectuados al momento de analizarse la constitucionalidad de la norma en la sentencia C 1094 -2003, los que se varían con la regla jurisprudencial definida en la sentencia **SU-141-2021**, al extender la exigencia a los eventos en que quien fallece es un afiliado, apoyándose en sentencias C-336-2014 y C-1176-2001, que en verdad, no constituyen el precedente específicamente aplicable, tal como se expone en las sentencias **SL 4318-2021 y SL 5270-2021**

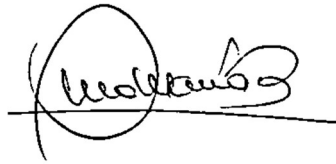
Es en este contexto, que ante la actual diversidad de criterios que se presenta entre las Altas Cortes, al coincidir con la postura interpretativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia **SL 1730-2020**, y en coherencia con la postura que he dejado vertida sobre este problema jurídico, bien como ponente o en aclaraciones y salvamentos de voto según fuera el caso; planteo de manera respetuosa el disenso frente al nuevo entendimiento que introduce la Corte Constitucional en la sentencia **SU-149-2021**.

Siendo, así las cosas y a partir del análisis del acervo probatorio se ha debido revocar la providencia para concluir conforme a lo previsto en nuestro ordenamiento

¹ Oportunidad en la que retomó los planteamientos esbozados en la sentencia **C 1176 de 2001** en la que declaró inexecutable la expresión "por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez y", contenida en el literal a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,

² **T 813 de 2013, T 018 de 2014 y T 538 de 2014**

jurídico el derecho a la pensión de sobrevivientes para el señor JOSÉ LEONEL RÍOS SILVA, por ser un beneficiario con mejor derecho al de la madre de la fallecida **SARAY ELENA CASTRO LONDOÑO** al acreditar una convivencia **desde el 23 de febrero de 2007 hasta la fecha de la muerte, el 31 de mayo de 2011.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Maria Zapata Perez', is written over a horizontal line.

ANA MARIA ZAPATA PEREZ
Magistrada